



Jueves
6 de enero
de 2022
Año XXXVIII
Nº 1.635
\$50
www.po.org.ar
www.prensaobrera.com
prensaobrerapo@gmail.com

Bartolomé Mitre 2162
C1039AAB
Ciudad de Buenos Aires

Editorial
Que no
se corte



MARIANO FERREYRA
LA LUCHA CONTINUA

CHUBUT - MAR DEL PLATA SAQUEO COLONIAL A LA MEDIDA DEL ACUERDO CON EL FMI



CON ESTA EDICIÓN



SUPLEMENTO POLO OBRERO
POR LA UNIDAD CLASISTA DE OCUPADOS Y DESOCUPADOS



COVID

El Estado tiende a borrarse cuando los contagios crecen

Argentina bate sus récords en materia de casos de Covid, con 95.000 en un día y en aumento, larguísimas colas para testearse y más del 50% de positividad sobre los testeados. El aumento exponencial de los contagios se convirtió en un factor de crisis por varias puntas. Primero mostró la precariedad del conjunto del sistema de salud, resultado de años de desmantelamiento del hospital público y la privatización. A esto se suma que, con la caída de los contagios a partir del pico de principios de junio de 2021, se fueron desmantelando los servicios creados para atender la pandemia y también se redujo el personal. Es así que a las apuradas y en forma improvisada se establecieron centros de testeos que además de insuficientes se tornaron caóticos, llevando incluso a enfrentamientos de los pacientes con el personal de salud. Sumado a esto que los pocos trabajadores para esta tarea son, a su vez, víctimas del Covid.

Otro aspecto es que un crecimiento desmesurado de los contagios eleva el número de decesos y pacientes graves. Según todos los indicios, la vacunación ha hecho que el efecto de la enfermedad sobre la salud haya perdido gravedad, en comparación con la primera y segunda ola. Las nuevas cepas, sobre todo ómicron, son más con-



tagiosas pero más "benignas", especialmente si se cuenta con vacunación completa. Eso no quita que aunque bajen porcentualmente las internaciones y muertes, estas no crezcan en términos absolutos.

El aumento tan brutal de los contagios está produciendo consecuencias a nivel económico. Mundialmente, los informes hablan de una ausencia muy elevada de trabajadores, lo cual está paralizando algunas empresas o ramas de la producción. En estos días, el alerta lo han dado los trabajadores de las empresas de aviación porque no pueden completar las dotaciones. En una reciente reunión de empresarios con el gobierno argentino,

convocada por el tema precios, salió la preocupación por las ausencias laborales.

La presión de los patronales es que se flexibilicen los tiempos de aislamiento, tanto para los contagiados como para sus contactos estrechos, e incluso que se habiliten testeos privados. De todas maneras, esto no parece que ayude a disminuir los contagios sino todo lo contrario. Lo cual solo puede ser entendido como la pretensión de convertirlo en una "gripezinha", cuando aún no hay pruebas de que se haya convertido en una enfermedad endémica y manejable.

La tendencia del Estado es ir retirándose de sus responsabi-

lidades y compromisos. En ese sentido, es la evaluación (un reclamo de varios gobernadores) de autorizar los autotests, lo cual recaudaría los costos en los bolsillos particulares y además "descentralizaría" el control epidemiológico, impidiendo así conclusiones y soluciones generales. El establecimiento de los llamados "pases sanitarios" va en el mismo sentido, apunta a desmantelar todos los protocolos y sacarse de encima la responsabilidad de impulsar la vacunación, yendo incluso a buscar a quienes no lo han hecho hasta ahora y ganarlos a los beneficios de la misma.

Es evidente que en toda esta

política hay una presión enorme por reducir gastos en función de sostener un ajuste que se torna clave en el medio de las negociaciones con el FMI. El gobierno lo fue haciendo a lo largo de toda la pandemia, lo cual se reflejó en las partidas para salud, pero también en la asistencia para poder sostener medidas de prevención, entre ellas la compra de vacunas. Pero no es la única razón.

La necesidad de tener una centralización, por ejemplo de los testeos, organizándolos centralmente con recursos y personal va en contra de todas las tendencias a la descentralización, con que presionan los efectores privados, las patronales y los gobiernos que tienen compromisos con ellas, y a un sistema de salud con fuerte injerencia de los sectores privados.

Lo que corresponde es acelerar y profundizar los testeos, y garantizar los aislamientos de contagiados y contactos estrechos, y lanzar una campaña persona a persona para lograr la mayor cantidad de vacunados con las dos dosis y el refuerzo. En Argentina, la disposición a vacunarse es mayoritaria, por lo que solo se trata de volcar recursos para que todos puedan hacerlo. La centralización del sistema de salud sigue siendo la mejor herramienta.

Eduardo Salas

La exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a los gobernadores, sobre la ruta que propone la Argentina para acordar con el Fondo Monetario dejó conclusiones importantes. Guzmán sostuvo que el desacuerdo central entre Argentina y el Fondo para llegar a un acuerdo es sobre la ruta para reducir el déficit fiscal, y que la posición de la Argentina es sostener una reducción "gradual" compatible con el crecimiento económico. La posición del FMI, fundamentalmente de Estados Unidos, sería de ajuste fiscal que comprometería el crecimiento.

Pero esta lectura encubre el actual ajuste fiscal. El mismo arrancó, en primer lugar, con la modificación del índice de aumento de las jubilaciones. Tuvo un segundo componente central, de 2020 a 2021, en la eliminación de todo el gasto por vinculado con la pandemia. En tercer lugar, el gasto público del Estado viene siendo licuado por la vía inflacionaria, que también contribuye a una mayor recaudación por la vía de bajar en

Guzmán mostró las cartas: la ruta del gobierno también es de ajuste

términos reales los mínimos no imponibles, aumentar la recaudación del IVA y otros impuestos, que golpean fundamentalmente a la clase obrera. Incluso teniendo en cuenta esto, Guzmán presenta una vía de nuevo ajuste fiscal (menor a la que reclama el Fondo), eso sí "gradual". Como el de Macri.

La mayor trampa de Guzmán radica de todas maneras en el hecho de que el conjunto de medidas que anunció como hoja de ruta de la Argentina frente al Fondo ya constituyen un fuerte ajuste. En efecto, Guzmán aceptó, en primer lugar, el establecimiento de tasas de interés reales positivas. Esto implicaría un fuerte ajuste en las tasas de interés que va a golpear por la vía de la contracción del crédito y va a incrementar la hipoteca de la deuda en pesos. Sumado a esto, el ministro anunció

el acuerdo del país con un "tipo de cambio compatible con la recuperación del nivel de reservas". Esto implica avanzar en una devaluación de la moneda, para preservar el superávit comercial, golpeando los ingresos de los trabajadores y apuntando a licuar los costos fijos de la economía. En tercer lugar, anunció un aumento de impuestos. Es falso que se base en una "mayor progresividad" porque el consenso fiscal recientemente suscripto con los gobernadores apunta a aumentar ingresos brutos, que se traslada a los precios en forma directa. Golpea, por lo tanto, la capacidad popular de consumo. En cuarto lugar, el gobierno ya anunció una suba de tarifas, aunque el Fondo, evidentemente, apunta a un golpe aún mayor, para reducir sustancialmente el esquema de subsidios.

Es claro que en estas condiciones, el "crecimiento del salario" es una promesa sin sustento, como lo fue durante todo 2021. Los salarios están por el suelo al igual que las jubilaciones. Un componente fundamental del aumento de la pobreza son los asalariados con salarios de hambre -ni hablar de los jubilados. Es claro también que en cualquier variante el "combate a la inflación" es un verso: la devaluación y los aumentos de tarifas e impuestos van a reforzar la inflación. Además esta es un arma de la que se vale el gobierno y que no se ha privado de utilizar en sus dos años de gestión para licuar el gasto e incrementar la recaudación y, por esa vía, reunir los recursos para pagar a bonistas y acreedores. Del mismo modo, es un verso el cacareo sobre el "crecimiento"

cuando se anuncian tasas de interés positivas, lo que implicará un encarecimiento brutal del crédito que pone un palo a la rueda a cualquier perspectiva de reactivación.

La reunión se produjo en un marco de crisis política inocultable. Un sector de Juntos por el Cambio faltó a la cita, aunque se reuniría con el ministro la semana próxima. El gobierno no pudo hacer de la tribuna con los gobernadores un escenario de consolidación de su posición de negociación. La misma, de todas formas, es endeble por otro motivo: el gobierno no tiene un plan alternativo al acuerdo con el Fondo. Por eso busca un compromiso y avanza en la negociación: pretende convocar a sesiones extraordinarias para tratar el plan plurianual.

Las consecuencias del acuerdo en marcha se harán sentir sobre las condiciones de vida ya golpeadas del pueblo argentino. La tarea más que nunca es enfrentar esta política de ajuste, en cualquiera de sus variantes.

Juan García



Que no se corte

Arrancó 2022 con grandes luchas ambientales

SANTI NUÑEZ

Si alguien caracterizaba la ausencia de los gobernadores de Juntos por el Cambio en la reunión de este miércoles con Guzmán como una diferencia sobre el rumbo económico a tomar, Gerardo Morales se encargó de anular esa interpretación. Finalmente, el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR arregló con Alberto Fernández que los mandatarios opositores se juntarán con el ministro de Economía a principios de la semana que viene. Los bloques políticos no están para nada exentos de crisis y grietas internas, y la oposición de JxC va a querer que el gobierno pague el mayor costo político de gestión posible, pero, como afirmó el propio Morales, "jugar a las escondidas con el tema de la deuda es una pendejada" (*Infobae*, 4/1).

Acuerdos de "Fondo"

El régimen político no está dispuesto a un no arreglo que, más allá de las diferentes versiones sobre sus detalles, tiene al FMI firme en sus exigencias: devaluación (40%, por lo menos), ajuste fiscal (recorte a la asistencia social, tarifazos) y aumento de la tasa de interés. La cuestión energética parece haber agregado un asterisco más al contrato. El aumento del gas licuado a nivel mundial (180% entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021) puede hacer que el Fondo pida más aumentos de tarifas porque la baja de subsidios no alcanza (*El Cronista*, 4/1), o bien acentúe la atención en otras medidas de ajuste que compensen tal situación.

Los tarifazos (quizá más altos de lo que se pensaba) se harán sobre un servicio en crisis y colapso, que en época de fiestas dejó a 21.000 hogares sin suministro en el AMBA (mientras esta nota se escribe, de hecho, 4.500 establecimientos siguen sin luz). El colapso alcanza no sólo a la luz sino a la provisión de agua potable, que escasea en el conurbano y en gran parte del interior. Son las consecuencias de seguir durante años una política de concesión que fomentó el vaciamiento y la desinversión con subsidios estatales. Las multas a Edesur son irrisorias, menos de 96 pesos por cada cliente.

Es un episodio más que demuestra la necesidad de abrir las cuentas de esas empresas para verificar el desfalco de los fondos públicos. Esa medida debería ser acompañada por una estatización bajo control obrero, para que estén esos recursos al servicio de los que trabajan y no de las cuentas bancarias de esos empresarios.

Los discursos derechistas que buscan instalar que con los aumentos pueden venir de la mano mejores servicios no son más que propaganda trucha,



porque no habrá más inversión sino aumentar el peso del gasto en los clientes. Es solo descargar la crisis sobre los trabajadores. Como pide cualquier acuerdo con el Fondo.

#TesteateEnCasa

Lo que también se corta (como la luz) son los testeos. Y eso ocurre en un momento de avance de la pandemia, no solamente por los casi 96.000 casos del pasado miércoles, sino también por el margen altísimo de positividad: más de la mitad de los testeos realizados.

Este avance se traduce en colapsos de los centros de testeos, cuya demanda aumentó entre un 300 y un 400% en las últimas semanas. No es casual: a fin de año, el gobierno de Kicillof despidió personal de salud de la "Campaña contra el Covid-19" en la provincia. Esta política no es patrimonio exclusivo de esa jurisdicción: Larreta viene de despedir, en septiembre pasado, a 1.000 enfermeros y enfermeras. Las situaciones de colapso derivan en un personal agobiado y expuesto como nunca al contagio.

Ante esta situación, tanto Carla Vizzotti (Nación) como Fernán Quirós (Ciudad) empezaron a promover los "autotest", que cuestan más de 2.000 pesos. También el "autoaislamiento", que se desliga del problema del testeo en tanto gobierno.

Una mayor propagación del virus llegó en un momento en el que se aplica lo dictado en el Presupuesto (no votado,

finalmente) que planteaba un recorte en el área sanitaria de por lo menos el 13%. El FMI no es salud.

No culpes a la playa

El fin del año 2021 e inicios del año entrante trajeron consigo un despertar del movimiento ambiental. Al "Chubutazo" contra la megaminería a cielo abierto le siguió, esta semana, el "Atlanticazo" contra la explotación petrolera en la costa marplatense.

Las iniciativas que depredan el ambiente para favorecer al capital son una política de Estado, en tanto el gobierno necesita divisas no precisamente para el desarrollo del país sino para pagar la deuda y arreglar con el FMI. Por eso no es casual el coro de voceros pro-gubernamentales que salieron en medios y redes sociales a atacar al "ambientalismo bobo o snob", al que calificaron de responsable de la pobreza y el atraso del país.

La cuestión requiere la examinación de varios puntos. Como explicamos ya en *Prensa Obrera*, este tipo de actividades como las que se quiere implementar en la Costa Atlántica están prohibidas en países como Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda o Groenlandia. Las ondas sísmicas que conlleva el accionar de las plataformas pueden alterar la fauna marítima, generando grandes problemas a los ecosistemas del mar. La "levedad" del impacto sólo existe en los informes realizados por el bufete de abogados de Equinor, empresa que se encargaría del proyecto, socia

de Shell y de la "S.A." de YPF.

A su vez, los riesgos de cualquier fuga son inmensos. En el golfo de México, por ejemplo, la contaminación avanzó más de 2.000 kilómetros, por lo que la distancia de 400 km que las plataformas tendrían con la playa no parece ser un argumento sólido. Pero, más allá de eso, ninguno de los detractores ambientales puede demostrar cómo, luego de décadas con soja transgénica, glifosato, megaminería, o fracking, el país no solamente tiene serios daños ambientales (al día de hoy hay incendios fuertes en once provincias del país), sino que además está lejos del "progreso" que ellos mismos prometen, con un atraso económico inmenso y una pobreza que alcanza el 43% de la población. Las ganancias de la expansión "productiva" del gran capital agrario, minero o petrolero van a la fuga de capitales o al pago de la deuda externa.

Como en Chubut

Los recortes en salud (puestos al desnudo con la nueva propagación del virus) y el ataque ambiental son producto de una política de saqueo en pos de llenar las arcas y las cuentas bancarias del capital financiero y el FMI. Los cortes de luz, a su vez, ponen de manifiesto un esquema energético en crisis, al que se le quiere agregar un aumento de tarifas a los ya ajustados bolsillos de la clase trabajadora.

Para revertirlo, hay que hacer como en Chubut. Que la lucha no se corte.

Dos votaciones opuestas, siempre con los trabajadores

Presupuesto 2022 y Bienes Personales

Con diferencia de una semana, los diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores se encontraron votando el rechazo al Presupuesto 2022 y la aprobación de la modificación a Bienes Personales (BB.PP.), en un caso contra el gobierno y en el otro con el gobierno contra la oposición de la derecha. Ambas votaciones revelaron que el Frente de Todos ha perdido el control de la Cámara de Diputados, al extremo que BB.PP. se aprobó por los votos de los cuatro diputados de la izquierda, sin los cuales perdía.

Ya hemos escrito sobre cada uno de los temas, pero nos interesa entrarle a la polémica que planteó el peronismo y en particular el kirchnerismo que por todo argumento nos acusa sistemáticamente de "funcionales a la derecha" por rechazar leyes en favor del capital, en contra de los trabajadores, de la independencia nacional y en este caso, claramente, en favor del FMI, como es el Presupuesto 2022.

Nosotros hicimos eje en la crítica al ajuste para el repago de la deuda que llevó el país a la quiebra, y más aún en nuevo endeudamiento, puesto que el Presupuesto elaborado por Guzmán preveía la toma en 2022 de 12.600 millones de dólares con un grupo de organismos internacionales (CAF, Fonplata, Fida y otros), un cifra enorme que sería envidia de un gobierno macrista, pero tan disparatada por la incapacidad de esos organismos de conceder esos montos, que mediante una planilla adjunta la redujeron a la mitad, pero para suscribir más deuda "intraestatal", léase Anses, Banco Nación, etc. La derecha solo cuestionó la desprolijidad, claro, ellos fueron y son campeones del endeudamiento.

Martín Tetaz en su dictamen de minoría pone blanco sobre negro algunos de los motivos de su oposición. Se opone "a la facultad del PE (Poder Ejecutivo) en torno a los derechos de exportación", quiere decir baja de retenciones a la exportación sojera y cerealera, todo lo cual aumentaría los precios internos y además desfinanciaría al Estado que en su concepto debe reducir gastos. ¿De dónde? Eso no lo dice, pero se aprecia en su rechazo a ciertos gastos de 2021



"como la jubilación anticipada, el relajamiento de los requerimientos para acceder a prestaciones previsionales para madres, la ampliación del PreViaje, la ampliación del Progresar y otros" (ídem). Como se verá su rechazo es a todo gasto público con olor a social, incluso al derecho a la jubilación por la que aportamos una vida. Pero una frase resume mejor que ninguna el núcleo de su cuestionamiento: "no es prudente discutir el Presupuesto 2022 cuando está en ciernes un plan plurianual con el FMI... el Presupuesto, el plan plurianual y el acuerdo con el Fondo serán tres piezas complementarias". Todo dicho.

Nosotros, justamente, votamos el rechazo al Presupuesto 2022 por los motivos opuestos a Tetaz y a toda la derecha, incluidos Espert y Milei. Que la inflación prevista del 33%, cuando se estima el doble, hará que gasten por la mentira y recauden por la realidad como pasó en 2021, así pierden trabajadores, jubilados, salud pública, obras públicas, etc. Además, en intereses de la deuda se prevén 5,5 veces más pesos que en vivienda. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses invertirá según el Presupuesto 1,2 billones de pesos en bonos del Tesoro en lugar de aumentarlos a los jubilados. Y así de corrido.

Romina Del Plá denunció, en varias intervenciones del breve debate en comisiones y en la sesión, que Guzmán estaría presentando ante el FMI un dé-

ficit fiscal real 2021 de 3% del PBI o aún hasta el 2,5%, lo que sería casi la mitad del previsto de 4,5%. Ese es el motivo de este nuevo "dibujo". Aunque el FMI pretenda metas más recesivas aún para garantizar acumular los dólares para los futuros pagos de deuda, el Presupuesto estaba en esa línea, era totalmente invotable desde el campo de los trabajadores.

Bienes Personales

Con BB.PP. la cosa se presentó diferente. La derecha impuso la sesión especial para tratar algo a lo que el propio peronismo le dio media sanción en el Senado y después Guzmán cajoneó por su costo de unos 45.000 millones de pesos, por supuesto para satisfacer al FMI. Ese es un dinero que sale de los bolsillos de sec-

tores de trabajadores y de clase media baja hacia el Estado. El aumento 2 a 6 millones de pesos del Mínimo No Imponible y de 18 a 30 millones de pesos por vivienda habitación alivia a centenares de miles de trabajadores afectados. Habríamos votado la media sanción que venía del Senado. Pero el gobierno dobló la apuesta y presentó un proyecto con esos alivios incluyendo actualización por inflación, un tema clave para que al menos no se agrave el carácter confiscatorio de la clase media que adoptó este impuesto que pintan como progresivo. Por ese motivo votamos el proyecto del gobierno.

La derecha no lo votó porque al mismo tiempo el gobierno incluyó aumentos de las alícuotas para patrimonios de más de 100 millones de pesos (al 1,5%) y de

más de 300 millones de pesos (al 1,75%), prorrogando además el 2,25% para bienes radicados en el exterior blanqueados por el macrismo a los fugadores de capitales. Estos cambios fueron hechos para neutralizar el impacto fiscal; nosotros denunciamos que todos los impuestos serían usados para la deuda y para subsidios al capital, pero la derecha votó rechazar todo directamente porque no admiten subas de impuestos a los altos patrimonios. Otra vez, motivos antagónicos a los nuestros, en este caso rechazando un proyecto que alivió una carga impositiva sobre sectores trabajadores.

Nuestros diputados denunciaron el conjunto del sistema impositivo por regresivo, basado en gravar a los consumidores con el IVA, Ingresos Brutos que va a los precios, impuesto a los combustibles y al cheque, todos los cuales pagamos en cada producto, tanto los trabajadores ocupados como los desocupados o jubilados, a pesar de tener ingresos de indigencia para millones de jubilados y de pobreza para la mayoría de los trabajadores. En oposición a este sistema impositivo, Romina rescató nuestro proyecto de impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, empresas, bancos y terratenientes, presentado oportunamente, un plan de confiscación a los confiscadores como parte de una reorganización social y económica integral.

Solo pasaron unos días y las mismas fuerzas de la "grieta" que se enfrentaron en las votaciones parlamentarias que mencionamos sellaron el pacto fiscal para aplicar impuestazos en las provincias y las re-reelecciones de los intendentes en Buenos Aires. Al mismo tiempo, peronistas, massistas y macristas votaron la ley megaminería que desató la rebelión del pueblo de Chubut y los obligó a derogarla. Las acusaciones de "votar con la derecha", primero, y de "votar con el gobierno" en el caso de Bienes Personales son interesadas por parte de los enemigos de los trabajadores. A nosotros nos guía el interés de clase de los trabajadores y fieles a nuestro programa de independencia política de la clase obrera actúan nuestros diputados. Estamos orgullosos de lo actuado.

Néstor Pitrola

Un año del aborto legal: una conquista que se defiende en las calles

Este 30 de diciembre se cumplió el primer aniversario de la puebla popular más importante de nuestro país en las últimas décadas. Hace un año, la marea verde conquistaba la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, luego de haber puesto en pie un poderoso movimiento de lucha que irradió a escala internacional. Fue una ley arrancada en las calles, en la ocupación de colegios y universidades, en manifestaciones en los lugares de trabajo, en asambleas del movimiento piquetero combativo en los barrios, con paros, con movilización política y con lucha callejera. Una ley que se abrió curso enfrentando a todos los poderes del Estado con el método de la lucha popular, sin subordinarse a ningún gobierno.

La conquista del aborto legal fue un golpe a las iglesias en el país del Papa y arrancado bajo un gobierno peronista, que contó con la bendición del Vaticano para llegar al poder. Nada detuvo a la marea verde -que amenazaba ser un verdadero tsunami contra todas las instituciones. La masiva movilización que rodeó al Congreso e inundó las plazas de todo el país en diciembre de 2020 para lograr su aprobación dio cuenta de la potencia de un movimiento que supo que sólo en las calles podría quebrar el lobby capitalista y clerical contra este derecho.

Retomar la movilización por su efectiva aplicación

A un año de la sanción, sin embargo, la efectiva aplicación de la ley aún debe defenderse en las calles. El enorme poder de las iglesias, amparado y reforzado por este gobierno, sigue siendo una traba de peso. Sin la presión del movimiento popular, las leyes progresivas bajo el capitalismo se pueden convertir rápidamente en letra muerta -o incluso dar lugar a una retrogradación en la legislación, como la ofensiva en curso contra el aborto legal en Estados Unidos.

En nuestro país, el procesamiento de Miranda Ruiz en Tártag por haber garantizado una IVE -la única médica no "objetora" del norte salteño- es el testimonio de la persecución que siguen sufriendo las y los trabajadores de la salud que garantizan derechos. La otra cara de la moneda es el bloqueo al acceso a este derecho en regiones ente-



Maria Darias

ras de nuestro país. Recordemos que Alberto Fernández introdujo la objeción por ideario institucional en la ley aprobada, que no obliga a los centros de salud a garantizar la práctica, sino a "derivar", lo que puede significar trasladarse a otras provincias y muchos kilómetros de distancia.

El Ministerio de Mujeres no protege a las Mirandas y a las mujeres privadas de sus derechos. Es impotente para enfrentar al oscurantismo clerical, porque es una superestructura más de un Estado y un gobierno que reforzan a cada paso el rol de las iglesias y su prédica de resignación, sometimiento y tolerancia ante las humillaciones. La contención social que los gobiernos de todos los colores tanto valoran no es otra cosa que los servicios prestados para hacer pasar el ajuste y el pago de la deuda con el hambre del pueblo. En buena parte del territorio nacional, la Iglesia católica tiene el monopolio de la educación, la salud y del Poder Judicial, y los templos evangélicos se abren paso en las barriadas más precarizadas, realizando las tareas de asistencia a las que el Estado renunció.

Antes de que se cumpla un año de la ley, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner designaron a Manzur como jefe de Gabinete -un símbolo de la cruzada contra nuestros derechos y de la tortura a niñas obligadas a ser madres. El "empoderamiento" en el gobierno del ala más derechista del PJ



Fede Imas

expresó la voluntad de avanzar más decididamente en un rumbo reaccionario y de ofensiva contra los intereses populares.

Con amparo y protección estatal, la Iglesia continúa bloqueando la educación sexual en la mayor parte del sistema educativo, a 15 años de la sanción de la ley. Lo mismo hacen impunemente con el aborto legal, actuando por fuera de la ley en las clínicas y obras sociales que gestionan.

Un reciente informe de Amnistía Internacional da cuenta de las múltiples trabas que existen para el cumplimiento de la ley a un año de su vigencia. Señala que no ha habido en todo este tiempo ninguna campaña de difusión destinada a garantizar este

derecho. Ni el Estado nacional ni las provincias, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron nada en materia de garantizar el acceso -que empieza por la posibilidad de contar con información certera y fiable sobre las garantías que incluye la IVE. Ni sobre la población en general ni para la capacitación de los profesionales de la salud -muchos de ellos sometidos a la imposición patronal proclerical, que es un verdadero cáncer de nuestro sistema de salud. La línea 0-800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación no da abasto para dar respuestas a la alta demanda. Amnistía también alerta sobre la falta de producción de datos y estadísticas oficiales, desagregadas por jurisdicción -lo

cual funciona como un verdadero tapadero de los atropellos.

Una lucha indisociable: separar a las iglesias del Estado y enfrentar el ajuste

La epopeya de la marea verde fue un golpe a uno de los pilares ideológicos más valiosos del régimen para la contención y la regimentación social. Porque -con sus secuelas brutales de muertes, mutilaciones y vejámenes sobre la salud- la clandestinidad del aborto es ante todo un instrumento de disciplinamiento político sobre las mujeres, un recordatorio de su lugar subordinado, de la tutela del Estado, sus instituciones y las iglesias sobre sus vidas y lo más íntimo de ellas. La criminalización del aborto fue siempre la cara más perversa de esta imposición, para condenar a mujeres pobres y trabajadoras que debían interrumpir un embarazo porque el mismo régimen que las condenaba les había quitado previamente la posibilidad de ejercer una maternidad deseada y planificada: precarizadas, privadas de trabajo o de un sustento suficiente, sin protección frente a la violencia de género, sin acceso a educación sexual, a información y métodos de cuidado.

La realidad de las mujeres hoy se ha agravado. El ajuste fondonometrista, la violencia, los femicidios, la pobreza y el hambre hacen estragos sobre la clase obrera y las mujeres trabajadoras en particular.

El gobierno, con la colaboración de los gobernadores cambiistas, se han empeñado en desmovilizar a la marea verde. En un país sacudido por los femicidios diarios, el kirchnerismo y sus agrupaciones se borraron de toda instancia de organización y lucha por las mujeres. No se puede estar de los dos lados del mostrador: erradicar la violencia y el machismo no es posible si se gobierna con las iglesias y el FMI.

La marea verde lejos está de haber agotado los propósitos de su movilización. Vino a cuestionar un régimen fundado en la violencia y la opresión. Abrió un potencial de transformación social que debe seguir abriendose paso. Y mostró cuáles son los métodos para triunfar: los de la clase obrera, los de las piqueteras que ganan las calles contra el hambre y el pacto con el FMI, los de la victoriosa rebelión popular en Chubut.

Juliana Cabrera

Los incendios como parte del ajuste y saqueo capitalista del gobierno

Las soluciones vendrán, como en Chubut, de la movilización popular

Los incendios en el país se propagan por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa, y en lo menos cinco de ellas siguen sin controlarse. La noticia de la caída de un helicóptero sobre el incendio en Aluminé, donde murieron dos tripulantes, terminó por demostrar las condiciones de trabajo extrema de los y las brigadistas, que soportan una enorme precarización laboral promovida por el Estado. En enero, el ministro de Ambiente Juan Cabandié y la burocracia de ATE y UPCN firmaron un convenio de trabajo ruinoso que a los dos meses los trabajadores denunciaron, provocando incluso marchas de brigadistas por la ruta 40 en su rechazo.

A dos años del nuevo gobierno y por los hechos queda claro que los incendios que hoy se producen en once provincias del país, muchos de ellos aún sin controlarse, y la precarización laboral a la que son expuestos brigadistas que trabajan en la primera línea para combatirlos son una política del Estado. De la mano de cada una de las gobernaciones, sin grietas, el Frente de Todos aplica el saqueo de recursos y tierras, dejando terribles pasivos ambientales, para garantizar principalmente la hoja de ruta del FMI, y los incendios que llevan más de un mes sin controlarse deben leerse en esta línea.

Gabriel Musa



El Chubutazo contra la megaminería impulsa la lucha ambiental en todo el país

Con puebladas, paros y movilizaciones masivas, el pueblo de Chubut logró la derogación de la ley de zonificación que permitía la megaminería en la provincia. Este triunfo alimenta la lucha en todo el

país contra la política del gobierno, Juntos por el Cambio y el FMI, que fomentan los negociados contaminantes para generar las divisas para el pago de la deuda externa. Mientras los incendios se multiplican sin

respuestas del Estado, mostrando el alcance de la crisis ambiental, las movilizaciones crecen. En Mar del Plata y todo el país es masivo el rechazo a los proyectos de exploración petrolera en la costa bonaerense.

Chubut: un triunfo popular de enorme alcance

El 21 de diciembre, la Legislatura de Chubut aprobó el proyecto de derogación de la ley de zonificación minera, que permitía la megaminería en la meseta, y que había sido votada días antes por todos los bloques patronales de la provincia (tanto el del gobierno de Arcioni como Juntos por el Cambio y el Frente de Todos). La derogación fue el resultado de una enorme movilización del movimiento ambiental.

El papel de las asambleas ambientales fue fundamental en el Chubutazo, se convirtieron en la referencia de las masas y desde allí se organizaron las acciones que garantizaron el triunfo del pueblo contra el lobby minero.

Desde la sanción de la ley de zonificación, entre gallos y medianoche, fueron creciendo las movilizaciones bajo la convicción de no abandonar las calles hasta la derogación de la ley. La organización dentro de las asambleas fue determinante para la poner en pie las medidas, evitar el desgaste del movimiento y, sobre todo, incrementar los cuidados frente a un Estado que buscaba amedrentarnos bajo la represión y persecución. Así, la movilización logró quebrar el intento represivo del gobierno de Arcioni, una tarea que ahora continúa en la lucha por el cese de toda la persecución judicial montada por el gobierno.

Con los métodos de la clase obrera, la organización independiente asamblearia, cortes de ruta y movilización, se logró articular un movimiento de masas



Si bien las asambleas tienen un funcionamiento permanente, así como sucedió en 2001, durante el Chubutazo la participación en las mismas se masificó, siendo realmente un espacio de organización popular. La organización de las asambleas dio un salto traccionando a nuevos sectores sindicales de la pesca, educación, independientes de la cultura, comunidades originarias a la participación activa en las jornadas de luchas. Es así

como el movimiento asambleario tuvo un salto en su organización, tomando cada vez mayor carácter de revuelta social con la exigencia y necesidad del llamado a un paro general. La bronca contra el poder político quedó plasmada en la quema de la Casa de Gobierno, entre otros edificios públicos.

Fue clave el frente único con el movimiento obrero y el movimiento desocupado de los barrios. El paro de los pescadores

fue definitivo en los últimos días de la lucha, impulsado por el rechazo a la megaminería y al proyecto de ley de pesca de Arcioni. Los trabajadores de la pesca salieron masivamente a la ruta 3 y cortaron en el Puerto de Rawson. A pesar de las maniobras desmovilizantes de las burocracias sindicales, fueron las bases las que pujaron para sostener las acciones directas, como cortes de rutas y paro.

Los alcances de esta victoria

no se limitan al plano ambiental. La lucha contra la megaminería dejó al descubierto un régimen que actuó mancomunadamente contra el pueblo a fin de garantizar sus negociados capitalistas. Son responsables de este avasallamiento al pueblo, el gobierno provincial de Arcioni, la Legislatura chubutense y todos los bloques que la integran, el gobierno nacional de Fernández, junto con los grandes grupos empresariales y la burocracia sindical, porque todos forman parte activa de un plan que busca saciar las necesidades fondamentalistas a costa de traer mayor hambre y miseria.

Es por esto que el Chubutazo es un horizonte de lucha para todas las luchas en curso. Fue un cierre de oro para este año de intensa lucha en la provincia, pero el Chubutazo no es un punto de llegada, sino de partida, es el impulso necesario para agrupar a las bases y organizar una salida de la clase obrera. El triunfo mostró una experiencia importantísima: luchar sirve y la única forma de derrotar a este régimen de hambre y saqueo es en las calles. ¡Vivan los métodos de la clase obrera! ¡Que viva el Chubutazo!

Cinthia Seibert

Suscríbete gratis a nuestros newsletters



**Prensa
Obrera**
.com | POR UN
PARTIDO OBRERO

#Atlanticazo: gran movilización contra la exploración petrolera en la costa bonaerense

Una movilización masiva, de más de 5.000 personas, recorrió las calles de Mar del Plata hasta el municipio en rechazo al permiso de explotación petrolera concedido por el gobierno a Equinor, YPF y Shell. En otros puntos de la costa, como Necochea, Miramar o San Bernardo, y en todo el país, se hicieron acciones de apoyo combinando el rechazo a la explotación petrolera off shore con el reclamo de que apaguen los incendios. En la Ciudad de Buenos Aires, una importante movilización, convocada por la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, concentró en Plaza de Mayo para dirigirse luego a las oficinas de Equinor.

El gobierno defiende el proyecto sosteniendo que se trata de un avance en la producción energética. Sin embargo, se basa en un acuerdo colonial. Han rebajado a 6% las retenciones que se prevé cobrar. Las petroleras gozan de regímenes especiales para garantizar la fuga de capitales, en una vía que fue abierta por el acuerdo secreto entre Chevron-YPF. La producción de energía carece de una planificación social, es un terreno de negocios al servicio de intereses del capital concentrado, nacional y extranjero. En la política del gobierno no hay una pizca de soberanía nacional. Los dólares que permite ahorrar la producción propia de petróleo irán al pago de la deuda externa, en el marco del acuerdo que se discute con el FMI.

La movilización puso eje en el rechazo de la población al intento del gobierno de imponer la explotación petrolera frente a la costa bonaerense. Es una oposición que ya se vio en la audiencia pública, donde el rechazo fue ampliamente mayoritario. Es que los estudios de impacto ambiental que justifican el proyecto minimizan totalmente el impacto en la fauna marina. Fueron llevados adelante por la empresa Serman y Asociados, contratada por Equinor. Estudios independientes muestran que la exploración sísmica, basada en bombardeos sobre el fondo del mar, provoca un daño importante a la fauna. A esto se suma la posibilidad, durante la explotación, de fugas y accidentes, que podrían provocar un daño irreversible en toda la costa. Estos motivos explican la responsabilidad de los gobiernos y el capital en el cambio climático, un motor del cual son las energías no renovables. Planteamos el cese de la explotación off shore, la nacionalización de la producción y distribución de energía, y una reorganización económica integral para colocar los recursos del país al servicio de las necesidades populares y del cuidado del ambiente. Esto implica terminar con el saqueo colonial que imponen el pago de la deuda y el sometimiento de la economía nacional a los intereses del gran capital.

Montenegro, intendente de Mar del Plata de Juntos por el Cambio, en una conferencia de prensa abrió reparos sobre la explotación petrolera y prometió ir a la Justicia. La Justicia, sin embargo, no va a frenar los proyectos de explotación: es una vía muerta bajo la presión conjunta del gobierno, la oposición patronal y las petroleras, como lo muestra la violación permanente de la legislación ambiental en todos los terrenos sin que los fallos judiciales ponga límites. Lo que busca el intendente es curarse

Juan García



Moreno: movilizamos en rechazo al presupuesto de ajuste de Mariel Fernández

A fines de diciembre se votó en el Concejo Deliberante de Moreno la propuesta de Presupuesto 2022 que envió la intendenta Mariel Fernández. El Frente de Izquierda Unidad rechazó este presupuesto de ajuste acompañado de una enorme movilización del Partido Obrero y el Polo Obrero en las puertas del recinto. Se hicieron presentes, además, delegaciones del MST y Libres del Sur.

Este presupuesto del PJ no planteaba resolver ninguna de las demandas más urgentes que los vecinos de los barrios populares vienen reclamando. Por el contrario, se trata de un presupuesto de ajuste. Propone llevar los salarios de los municipales a 40.225 pesos, muy por debajo de la línea de pobreza. La concejala Lorena Pereira (PO-FITU) planteó la necesidad de un salario de emergencia de 70.000 pesos en el camino hacia un salario municipal que cubra el costo de la canasta familiar. Es una burla para los municipales que, mientras cobran salarios de pobreza, la dieta de los concejales llegue a 200.000 pesos y la de la intendenta a 600.000.

Por otra parte, este presupuesto se dedica a embellecer



la precarización laboral desde su organismo, Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local -Imdel. De esta forma, el municipio continúa con el fraude laboral de los miles de trabajadores informales (Potenciar Trabajo) que cumplen labores municipales como zanjeo, construcción de veredas, mantenimiento de plazas, por fuera del convenio municipal e hiperprecariados.

En el distrito del asesinato laboral de Sandra y Rubén, donde hubo una rebelión educativa por las deplorables condiciones edilicias de las escuelas, el Fondo Educativo solo aumenta un 49%, contra una inflación que se proyecta para este año en un 60-70%. Además, parte de esos fondos se destinarán para otros organismos. El servicio alimentario escolar seguirá siendo restringido (no universal) y con una suma

irrisoria. El presupuesto de salud no proyecta la construcción de nuevas salitas ni la contratación de más profesionales o administrativos para responder a las necesidades de la población.

En Moreno hay un gravísimo déficit habitacional de 13.000 familias. Sin embargo, este presupuesto proyecta construir solamente 265 casas! Nada dicen sobre la finalización del complejo habitacional de Villanueva o

sobre la entrega de las casitas de La Perla. No se resuelve este grave problema habitacional, pero se refuerza la represión: la Secretaría de Derechos Humanos se prepara para "seguir desarticulando usurpaciones en conjunto con la Fiscalía y la Policía" -o sea, para seguir reprimiendo.

El presupuesto, en vez de gravar a los Coto, Carrefour o Maxiconsumo, o los monopolios como La Perlita y los countries, proyecta un aumento del 70% de la recaudación por infracciones de tránsito y un aumento del 150% en la recaudación del estacionamiento medido. Refuerza, de esta forma, un régimen impositivo completamente regresivo.

Por todo esto, el Frente de Izquierda Unidad rechazó este presupuesto de ajuste. La sesión se dio en el marco de una movilización de miles de vecinos en la calle. Se terminó el año luchando para graficar un 2022 que se viene con más organización y lucha desde cada uno de los barrios de Moreno y del movimiento obrero de la zona contra toda forma de ajuste o precarización laboral.

Cristian Franco

La Matanza: Espinoza, con la complicidad de Juntos, aprueba un presupuesto ajustador

Gran movilización del Polo y el Partido Obrero para rechazarlo

El pasado miércoles 29 se trató el Presupuesto 2022 de La Matanza en el Concejo Deliberante. El mismo fue aprobado por el Frente de Todos y tres concejales de Juntos. Desde las bancadas del FIT-U se rechazó el proyecto denunciando su contenido ajustador. El rechazo fue acompañado por una importante movilización del PO y el Polo Obrero, levantando los reclamos por salud y educación, tierra y vivienda, trabajo genuino y contra la contaminación ambiental.

Presupuesto de ajuste

El concejal del PO y el FIT-U, Juan Romero, denunció que el aumento del presupuesto está por detrás de la inflación proyectada para 2022 por el Banco

Central. Lo presupuestado en salud es escandaloso: un aumento del 20,64% en 2022, en un cuadro de crisis total del sistema de salud municipal, con salarios de pobreza, precarización laboral, falta de personal e insumos, y en plena tercera ola de Covid. Juan Romero destacó las numerosas movilizaciones de los trabajadores de la salud durante todo 2021 y exigió "el pase a planta de todo el personal y un aumento salarial equivalente al costo de la canasta familiar".

El presupuesto destina cero pesos a la construcción de viviendas. El oficialismo se amparó en que los planes de vivienda recibirán financiación externa al municipio, a través de programas nacionales. Pero el Estado na-

cional solo ha construido 6 mil viviendas en el último año, contra un déficit habitacional que afecta a 4 millones de familias. El reciente desalojo violento e ilegal del Barrio 1º de Noviembre en La Matanza confirma que la política habitacional de Espinoza y Kicillof continúa siendo la que se evidenció en Guernica.

Desde nuestra bancada también se denunció el 0,57% destinado para la Secretaría de Géneros. En un distrito con 2,5 millones de habitantes y que se encuentra entre los que poseen más denuncias por intentos de femicidios, existe un solo refugio para mujeres en situación de violencia.

Por último, el Presupuesto 2022 no especifica si el fondo educativo va a utilizarse para la



construcción y ampliación de escuelas. Exigimos un plan de obras elaborado por la comunidad educativa y los sindicatos.

Condicionado por el acuerdo con el FMI

Existe un problema de fondo que va a profundizar aún más el panorama de crisis en La Matanza. La mitad de los recursos económicos se componen de financiación provincial y nacional. Los programas

sociales, educativos, las obras públicas, etc., no pueden escapar de los recortes realizados en función del pago de la deuda.

En definitiva, el presupuesto presentado por Espinoza no es ajeno a la orientación fondamentalista del gobierno y la oposición de Juntos. Organizarse por el no pago de la deuda y contra el acuerdo con el FMI es decisivo.

Yamila Viera

Pacto entre el Frente de Todos y Juntos en la Legislatura bonaerense

La voz opositora fue la del Frente de Izquierda Unidad

El 28 de diciembre tuvo lugar en la Legislatura bonaerense un "supermartes legislativo". Sesionaron en simultáneo Diputados y Senadores, para aprobar en tandem los proyectos de ley del Presupuesto 2022, la Ley Impositiva, la Ley de Ministerios y la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades, habilitando la re-re-elección de los intendentes. Más allá de algunos choques dentro de cada bloque en esta última cuestión, el dato distintivo de ambas sesiones fue la confluencia en las votaciones entre el Frente de Todos y Juntos, que dieron curso a todos los proyectos en votación.

Presupuesto de ajuste y endeudamiento

Tal como denunció la bancada del Frente de Izquierda Unidad, el Presupuesto 2022 de Kicillof marca una ruta de ajuste, endeudamiento, represión y precarización laboral para la provincia. La oposición patronal de Juntos, que comparte esa orientación general, aportó sus votos a la llamada "Ley de leyes", sin mucho debate al respecto.

Mientras el mensaje (fundamentación) del proyecto enumera carencias enormes en la provincia, el Presupuesto no apunta ni mínimamente a resolverlas. De hecho, se establece un ajuste que incluye un recorte nominal para la partida de salud, en medio de la nueva ola de contagios.

Lo aprobado, fundamental-

mente, es una orientación política para cumplir con el pago a los acreedores de la deuda provincial y contraer nuevas deudas. Así lo expresó incluso un legislador de Juntos, que frente a las críticas del oficialismo por el "enorme endeudamiento" de Vidal respondió que "discutimos mucho tiempo el endeudamiento de uno y del otro, pero hoy estamos aprobando casi 1.000 millones de dólares y no decimos nada".

También se destaca el aumento de las partidas de Seguridad. Solo el Frente de Izquierda cuestionó que se refuerce a la maldita Policía Bonaerense, integrando 10.000 efectivos nuevos en planta permanente. Mientras tanto, para los trabajadores del Estado, de la educación y la salud se crean casi exclusivamente cargos en planta temporal y se sostiene la precarización laboral.

Pactos espurios: re-re-elección, cajas negras en los municipios y eximición de sanciones a los intendentes

La aprobación de todas las leyes en cuestión fue parte de un paquete general que estuvo en negociación hasta el último minuto, completamente por fuera del ámbito de la Legislatura. Ni los propios legisladores tuvieron en sus manos, a la hora de la votación el texto final de la modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del Presupuesto provincial. Las au-



Guillermo Kane
@guillekane

“ Denunciamos en la Cámara de Diputados el acuerdo del PJ, el Pro y la UCR para extender la reelección de intendentes mientras siguen ajustando y endeudando la provincia. Quieren perpetuar a los barones. Les avisamos: miles de bonaerenses más les van a seguir dando la espalda”.



toridades de la cámara enviaban a los bloques correos con enlaces vacíos y con archivos viejos.

Como parte de este pacto, los intendentes del oficialismo (fundamentalmente los barones del conurbano) y los de Juntos (PRO-UCR) consiguieron aprobar por amplia mayoría un "borrón y cuenta nueva" que permite a 94 intendentes que llevan más de dos mandatos volver a re-elegirse en 2023. Si bien en ambos bloques hubo algunas divisiones (el masismo en el Frente de Todos, Vidal y un sector de la UCR en Juntos), fueron expresiones completamente menores.

El Frente de Izquierda, una vez más, marcó el contrapunto, con

un rechazo de plano a este pacto político, denunciando que busca la auto-preservación de un aparato de opresión contra el pueblo en cada distrito y el carácter antidemocrático que tiene. No olvidemos que hace pocas semanas los armados de los intendentes quedaron fuertemente cuestionados en las legislativas de 2021.

Por otra parte, el texto final del Presupuesto, que se dio a conocer horas después de la sesión, incorporó 11 artículos nuevos en el capítulo dedicado a los municipios. En ellos se establecen nuevos recursos para el manejo discrecional de cada municipio, entre los que se restituye el "Fondo de Infraestructura Municipal" (que

había sido omitido en el proyecto original), otorgando 17 mil millones de pesos directamente a las comunas. Además, se integran artículos que significan un perdón a los intendentes y funcionarios, eximiéndolos de sanciones frente a ejercicios deficitarios, o directamente frente al desvío fondos.

Luchemos contra el pacto de Todos y Juntos

Los bloques mayoritarios de la Legislatura, el Frente de Todos y Juntos, han establecido un pacto que fija una ruta para la provincia. Intentarán imponerle a los trabajadores bonaerenses un mayor ajuste, para honrar los compromisos con los acreedores, e incluso para contraer un mayor endeudamiento.

Acompañado de esto, el intento de salvataje de los intendentes de todos los colores tiene una relación directa. Se intenta preservar a los aparatos políticos que, distrito por distrito, ponen sus recursos en función de sostener un régimen que condena a la población al hambre y la miseria.

Es necesario, entonces, profundizar el camino emprendido por el Frente de Izquierda Unidad en este nuevo período en la Legislatura, que se encargó no solo de denunciar este pacto, sino también de darle impulso a la movilización popular para rechazarlo.

Fede Casas



NOTICIERO SINDICAL

Trabajadores del Estado nacional

Con la firma paritaria, rubricada de manera común entre UPCN y ATE, se estableció el descuento adicional del 0,5% del salario para las y los trabajadores que no están afiliados a ningún gremio. De esta manera se oficializa un castigo a las y los trabajadores por no sindicalizarse y la recaudación de un monto de dinero para los sindicatos por parte de la patronal, en este caso los funcionarios. ¡Un escándalo!

Garbarino

El cierre de la cadena de electrodomésticos dejó a más de 3.000 trabajadores sin su fuente de trabajo. Lxs trabajadores vienen de hacer otro corte en el Puente Pueyrredón frente a la negativa del gobierno de pagarles el Repro. La burocracia sindical de Comercio actuó para evitar la acción, representando una vez más una posición totalmente patronal. A pesar del decreto antidespidos y de doble indemnización, Garbarino no paga sueldos ni tampoco indemnizaciones ante la mirada complaciente del gobierno nacional y de los locales. Luego del corte, el gobierno anunció el ingreso al Programa de Inserción Laboral (PIL) de 1.800 trabajadores, medida totalmente insuficiente pero que muestra la presión de la lucha.

Despidos en Gri Calviño

La metalúrgica ubicada en Florencio Varela será escenario de un nuevo conflicto ante el despido de varios trabajadores desde el 2 de enero. Con toda la planta suspendida, igual realizarán una asamblea donde resolverán un plan de lucha por la reincorporación de todos los compañeros y la defensa de las conquistas salariales obtenidas que la empresa quiere quitar. La reciente militarización de la planta con la Policía Bonaerense en el interior busca amedrentar acciones de lucha y preparó el terreno para los despidos. El gobierno de Kicillof al servicio de esta multinacional que despidió y ajusta.

Trabajadoras de casas particulares

Con el cobro de enero corresponde el aumento establecido para diciembre, que es del 7%. Con este aumento, el salario promedio de una trabajadora por 8 horas de trabajo durante seis días de la semana queda oficialmente establecido en 31.416,50 pesos y 256 la hora. Estos montos mínimos salariales, establecidos por el gobierno, están por debajo de la canasta de indigencia y afectan la vida de un millón y medio de mujeres.



Paritaria bancaria

En una negociación firmada el 23/12 por el 8% de incremento salarial, La Bancaria cerró su paritaria en un 51% acumulado. Importa el dato porque se trata del gremio que hizo punta cerrando una negociación a la baja a principios del año, para condicionar el resto de las paritarias. Por febrero, Palazzo, secretario general del gremio y hoy diputado nacional por el FdT, hizo un gesto a su gobierno cerrando una paritaria que respetaba el monto inflacionario que figuraba en el Presupuesto dibujado por Guzmán, del 29%. El gesto le valió una candidatura a diputado. Sin embargo, las patronales con la que le toca discutir a La Bancaria vieron incrementadas sus propias ganancias varios puntos por encima de la inflación, en gran medida por el pago de intereses por Leliqs, un negocio fenomenal cuyos intereses paga el Banco Central sin chistar.

Trabajadores universitarios y otros organismos descentralizados

Para echar lastre de una negociación paritaria que deja los salarios estatales por debajo del nivel inflacionario del año, los sindicatos firmaron un bono compensatorio de 20 mil pesos. Contra lo que suele ocurrir, esta

negociación no se extendió a los demás gremios que pertenecen a organismos financiados por el Estado, como ocurre con las universidades nacionales. Para la docencia universitaria y para los no docentes apenas se otorga-

ron unos bonos insuficientes de 2.500 pesos para los primeros y de 3.000 para los últimos. Reclamamos que se otorgue el bono para todos los gremios estatales sin discriminación y que se reabran las paritarias.

Amenaza de desalojo a lxs trabajadores de La Nirva, en La Matanza

Luego de incumplir con el pago de salarios hacia los trabajadores, haber entregado cheques sin fondos, no pagar a proveedores y haber desaparecido dejando un tendal de deudas, la Justicia dio la orden el 30/12 de desalojar a los trabajadores, mostrando una vez más que la Justicia laboral como el gobierno son enteramente patronales. Las y los trabajadores se encuentran juntando adhesiones para hacer conocer el caso y para concentrar la solidaridad con las familias estafadas.



140 municipales despedidos en Berazategui

Los trabajadores realizan bloqueos de portones desde el 2 de enero, impidiendo la salida de camiones recolectores de residuos. Los despedidos son trabajadores contratados con antigüedad de

hasta diez años, lo que constituye un verdadero fraude laboral. Entre ellos hay 22 miembros de la comisión directiva de un nuevo gremio municipal (UPMB). El intendente Mussi busca liquidar

una organización sindical que reclama el pase a planta permanente, en contraste con el viejo sindicato copado por la burocracia sindical que responde directamente al mussismo.

Guardavidas en lucha

Los gremios de guardavidas de la provincia de Buenos Aires se movilizaron en forma simultánea el 27/12 para reclamar la aplicación de la ley 14.798 (que rige la actividad) y mejoras en la seguridad pública. Las ma-

nifestaciones se produjeron en Pinamar, Villa Gesell, Monte Hermoso, Miramar, Mar Chiquita, Necochea y Mar del Plata, y se fueron sumando nuevas ciudades con manifestaciones de rescatistas en plazas, balne-

rios o frente a las intendencias. La Federación Argentina de Guardavidas reclama la reincorporación de los guardavidas separados por luchar en Monte Hermoso y la aplicación de la ley provincial.



UOM siderurgia

El 17 de diciembre, la UOM actualizó la paritaria de la rama siderúrgica del gremio adicionando al 35,2% ya obtenido un 15% en tres cuotas para enero, febrero y marzo. Con estos montos, la rama se iguala en negociación a la metalúrgica que había cerrado este monto en octubre. El acuerdo paritario fue criticado por la Comisión Interna de Acindar de Villa Constitución que señala en un comunicado: "En los últimos años paritarios se ha perdido más de un cuarto del poder adquisitivo de nuestro salario. Este desfasaje ni siquiera es planteado en la negociación nacional y sumado a esto se cierra este tipo de acuerdos que van siempre detrás de la inflación" y reclama plenario de delegados de Villa para rechazar el acuerdo y armar un plan de lucha.

Crisis energética: el sinuoso camino al FMI entre subsidios y tarifazos

El gobierno se aleja de la meta de ajuste fiscal fondomonetarista del 1,5%

El tarifazo del 20% en el servicio eléctrico, aprobado por el gobierno, sería insuficiente para reducir los subsidios al nivel del 1,5% del PBI para 2022. Más aún, Alberto Fernández seguirá aumentando la transferencia millonaria de dólares a las patronales para evitar una nueva escalada de la crisis energética o una salida con más tarifazos.

El gobierno ya veía aumentando el caudal de subsidios destinados al sector energético, pasando de 4.400 millones de dólares en 2019 a 10.910 millones de dólares en 2021, llegando al 2,4% del PBI y superando la proyección del 1,7%.

Recordemos que estos fondos son aplicados directamente al beneficio de las patronales productoras, transportadoras y distribuidoras de energía, a libro cerrado, sin determinar el costo

real de producción y por medio de diversos mecanismos, como asignaciones directas, subsidios a la producción de gas no convencional e incluso al pago de la energía consumida y no abonada por las distribuidoras eléctricas a la empresa estatal Cammesa.

El precio internacional del gas viene creciendo debido a la crisis energética, con una baja histórica en la exploración y descubrimiento de petróleo y gas, una industria paralizada durante 2020 y un crecimiento de la demanda debido a la recuperación económica internacional y a las bajas temperaturas en el hemisferio norte. Esto ha acentuado la tendencia a la explotación de carbón -una de las fuentes más contaminantes- a falta de un desarrollo y capacidad de las energías sustentables.

El gobierno nacional debería

afrontar una triplicación (o más) del costo de importación de gas licuado para hacer frente a la demanda del período invernal, pagando de pagar 8,50 dólares por millón de BTU a aproximadamente 20 dólares por millón de BTU.

Otra variante sería optar por la utilización de gasoil y fuel oil para la generación de energía en las centrales termoeléctricas, las cuales resultan ocasionalmente más baratas pero más ineficientes y contaminantes.

Con el tarifazo del 20% y la segmentación de tarifas para 500.000 usuarios, el gobierno no estaría ni cerca de su meta de ajuste de los subsidios al 1,5% del PBI. Según el Cronista Comercial, con un aumento pleno de la tarifa del 25% y una estimación de los precios internacionales actuales, el gobierno debería aplicar 12.500

millones de dólares en subsidios energéticos, incluso a pesar de que se ahorraría 600 millones de dólares por el vencimiento de la Resolución 46/2017, de subsidios a la producción el gas no convencional en Neuquén y la Cuenca Austral.

El gobierno se apresta a conformar un cóctel explosivo donde crecerían más los subsidios a las patronales energéticas a costa de las aspiraciones y directivas del FMI, en tanto la población es castigada con uno o más tarifazos. De allí el apuro por culminar la obra del gasoducto en Vaca Muerta y el cuestionado avance en la instalación de plataformas petroleras en el mar argentino.

La producción y distribución energética es un sector estratégico de la economía nacional y de la calidad de vida de la pobla-

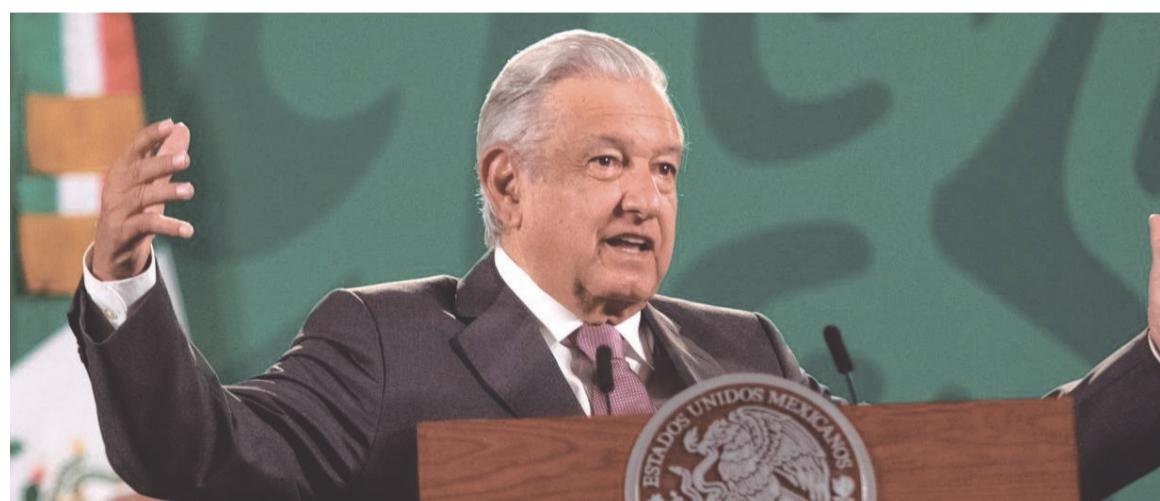
ción trabajadora, que debe sufrir cortes en el suministro eléctrico, saltos en los precios y una financiación indirecta a las patronales multimillonarias del sector, con el propósito de satisfacer la agenda de ajuste que dictan el FMI, por un lado, y los reclamos de los capitalistas del sector, por el otro, que se hacen cada vez más difíciles de conciliar.

La salida al laberinto de ajuste del gobierno no puede implicar una nueva confiscación contra el pueblo trabajador, sino la recuperación de los recursos nacionales, por medio de la expropiación de toda la cadena energética y su puesta al servicio y bajo control de los trabajadores. Así como el rechazo al acuerdo con el FMI y el capital financiero.

Marcelo Mache

■ INTERNACIONALES

La clase obrera mexicana bajo el gobierno nacionalista de Morena



En 2021, el sueldo promedio de la clase obrera mexicana ha sido de 6.304 pesos mexicanos por mes. El salario mínimo a partir de 2022 pasa a ser de 172 pesos diarios, lo cual implica 5.160 al mes. Para cubrir necesidades básicas (vestido, comida, medicamentos) de una familia de cuatro personas son necesarios 19.000 pesos. El salario promedio en el México de López Obrador (AMLO) es apenas un 33% de la canasta básica. El umbral de la pobreza en materia salarial está en 7.050 pesos.

En 2021 ha habido una leve reducción de la desocupación, pasando al 4,2%. De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, sobre 52.200.000 trabajadores ocupados existen 31 millones en condiciones de informalidad, lo cual conlleva a la precariedad laboral y salarios por debajo de la canasta familiar. Es que, en 2021, sobre 10.500.000 trabajadores que obtuvieron trabajo, 8.200.000 lo hicieron en la informalidad: el 78%. Cabe señalar que la tercerización laboral (*outsourcing*) en México, previa al gobierno de AMLO, ha sido suprimida por éste, para ser sustituida por otro régimen de tercierización llamado "subcontratación de servicios especializados", que mantiene el empleo precario. Para ilustrar cómo actúan las patronales mencionaremos que entre noviembre y diciembre de 2020 se perdieron 277.820 puestos de trabajo (68,8% en planta permanente) siendo reincorporados en enero solo 86.575, pero

afectados en sus condiciones laborales, de seguridad social y vivienda.

Las centrales obreras, absolutamente ligadas al Estado y a los partidos del régimen (Morena, PRI, PAN), llamadas centrales charras, han actuado de un modo sistemático, dando la espalda a las reivindicaciones obreras. AMLO ha anunciado la "democratización" de los sindicatos sobre la base de la modificación de los estatutos y la realización de elecciones. Estamos frente a la tentativa de "reciclar" un aparato absolutamente desprestigiado en la base de los trabajadores -y preservar, por esta vía, la tutela y

la regimentación del Estado sobre las organizaciones obreras. El desaliento sufrido por la clase obrera de la nación azteca debido a las continuas traiciones de la burocracia sindical ha hecho desertar a la gran masa del proletariado de sus organizaciones sindicales anquilosadas, con dirigentes enriquecidos y atados al Estado capitalista. Solo el 5% de los trabajadores están afiliados a los sindicatos. AMLO, aunque critica demagógicamente a esta dirigencia, se vale de ella para frenar las huelgas.

López Obrador se ha jactado -en una de sus Mañaneras- que solo ha

habido veinte huelgas, entre ellas la de Notimex y la de los municipales de la ciudad de México. Estas declaraciones sobre la escasez de huelgas pretenden ocultar los movimientos de lucha que han tenido lugar fuera de la órbita de la burocracia sindical charra. En diciembre de 2021, los trabajadores de limpieza de Toluca tomaron los edificios públicos dirigidos por la sección local del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado; en Hidalgo, los trabajadores de la educación suspendieron las actividades por falta del pago de aguinaldo no bien comenzó 2022, organizados en el SNTE. No olvidar

a los miles de obreros tercerizados de la refinería Dos Bocas de Pemex, que en 2021 organizaron una protesta por sus condiciones laborales y salarios contra la política de AMLO y otras. Con una inflación del 6% y salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, la precariedad laboral es un estigma para millones de trabajadores. La lucha por un salario mínimo de 19.000 pesos actualizados según el costo de vida, la prohibición de despidos, la suspensión de la tercerización laboral, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, requieren poner en pie un movimiento sindical independiente del Estado, los partidos patronales y los gobiernos de turno. Es necesario abrir un debate en la vanguardia, que ha estado a la cabeza de los movimientos de lucha mencionados sobre esta imperiosa necesidad, de articular una coordinación y accionar común de las organizaciones que han impulsado estas luchas y poner en pie al movimiento obrero sobre bases clasistas, expulsando a la burocracia sindical. Es necesario defender la independencia política de los trabajadores en el plano sindical y también en el plano político y abrir paso a la construcción de un partido obrero revolucionario y socialista que supere el principal obstáculo que tiene la clase obrera mexicana: el nacionalismo de contenido burgués encarnado en Morena.

Roberto Gellert

Uruguay: sí en el referendo, sí a un plan de lucha

Importante transición en el movimiento obrero

A casi dos años de asumido el gobierno derechista de Lacalle Pou, se está produciendo una importante transición con el crecimiento del movimiento de lucha de los trabajadores.

Un ascenso de huelgas con fuerte presencia de elementos independientes. Trabajadores de frigoríficos y el puerto -dos sectores reactivados con exportaciones- han obtenido con duras luchas parte importante de sus reclamos. También otros sectores: docentes, salud, energía, etc.

El movimiento obrero golpeado por el triunfo electoral de Lacalle Pou, la crisis capitalista mundial y el aislamiento que provocó la pandemia sufrió una ofensiva gubernamental-patronal: 100 mil nuevos pobres, 11% desocupados, 400 mil trabajadores precarizados, retroceso salarial, etc. Diversos sindicatos salen a luchar por la recuperación salarial. Aislados unos de otros. Un paro general en septiembre se encontró con la manifestación sindical más importante de los últimos veinte años.

Pero la dirección del PIT-CNT no encara una lucha de conjunto. Está subordinada políticamente a la orientación del PC y sus aliados: colocar al movimiento obrero en un "bloque político común" con el Frente Amplio (FA), que estuvo quince años en el gobierno y no produjo cambios, permitiendo la sobrevida del régimen oligárquico-capitalista.

El triunfo electoral por escaso margen de Lacalle Pou en un frente derechista, incluso con agrupamientos bolsonaristas (Cabildo Abierto -CA), dirigido por un ex comandante militar, llevó al FA a una política de "colaboración".



Para demostrar a la burguesía que no se radicalizaba ni abandonaba la política de colaboración de clases. No movilizó contra el ataque al pueblo que hizo votar Lacalle Pou con la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esta ley omnibus (476 artículos) legisla en forma reaccionaria sobre todos los ámbitos de la vida nacional (seguridad, reforma de códigos, educación, derecho a huelga, privatización de empresas públicas, etc.). Protestando -pero aceptando la votación "democrática" del Parlamento con escasa mayoría derechista-, la dirección del FA aceptó resignada la "realidad" de la LUC. Arrastró a este cuadro de parálisis a la dirección PC-FA del PIT-CNT.

Reacción de base

En la clase obrera, los estudiantes, organismos de derechos humanos, etc., comenzó a desarrollarse una campaña por un referendo para derogar la LUC. Pero el FA no se pronunciaba. Para la dirección frentepopulista había que "acumular" hacia las

elecciones de 2024. La presión se hizo tan intensa que la dirección del FA negoció lanzar la campaña por el referendo, pero planteando la derogación de solo 135 artículos (la otra parte había sido votada por el FA).

Aún así era incierta la obtención de 600 mil firmas para obligar esta convocatoria. ¡En tiempo récord se logró más de 800 mil adhesiones! La Justicia, obligada, convocó al referendo para el 27 de marzo próximo.

La combinación de luchas crecientes con la imposición del referendo ha puesto a Lacalle Pou a la defensiva. A pesar que la LUC autoriza al aumento de tarifas de servicios públicos, que el gobierno venía haciendo, ahora decidió discontinuarlo por temor a un salto en la protesta popular. También postergó la reforma previsional que aumenta la edad de retiro y disminuye el monto de las pensiones.

Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para dar "prisión" domiciliaria a detenidos mayores de 65 años y así libe-

rar una treintena de oficiales represores-torturadores de la dictadura. Una masiva marcha convocada por Familiares de Detenidos-Desaparecidos llevó a archivar el proyecto.

Este panorama no significa que el gobierno de Lacalle Pou esté acabado y solo se espere la oportunidad para enterrarlo. Acaba de prorrogar por 60 años! la concesión del puerto a una empresa belga. Contra esto y por reclamos que esta patronal desconoce, los trabajadores portuarios vienen ejecutando un plan de lucha. A fin de año un piquete de camioneros bloqueó una entrada al puerto. Fuertemente reprimido, el gobierno usó un artículo de la LUC que prohíbe los piquetes. Días antes fueron desalojados los choferes del transporte colectivo de la terminal de micros, con heridos de bala.

¿Y la dirección del PIT-CNT?

En lugar de movilizar, con medidas de acción directa contra la represión y por el triunfo de las luchas, usa la convocatoria al referendo para mantener una tregua. El secretario general del PIT-CNT fue al puerto a desalojar "pacíficamente" a los huelguistas.

La dirección mayoritaria del PIT-CNT (y el FA) posterga la lucha de los trabajadores por sus derechos. Es un error. Se está jugando el futuro del movimiento obrero a una sola carta: el pronunciamiento electoral de toda la sociedad uruguaya. Si el gobierno llegara a triunfar (las encuestas dan un empate técnico), tratará de utilizarlo contra los reclamos obreros. El movimiento obrero debe tener su propio plan independiente de lucha. El "pueblo"

no puede pronunciarse contra los derechos de los trabajadores. Los que deben defender su salario y conquistas son los propios trabajadores. Para eso han constituido sus sindicatos.

Esta situación se reflejó parcialmente en el Congreso del PIT-CNT: 20% de los sindicatos propugna la independencia de la central obrera respecto del FA. Un planteo progresivo dado el carácter colaboracionista-frente-populista de este. Un triunfo del Sí a derogar los 135 artículos no le plantea a la dirección frenteamplista una etapa superior de lucha para acabar con el gobierno antíobrero, sino un mayor sosegate, para "no caer en provocaciones" y acumular votos para las elecciones de 2024.

El FA ha demostrado hasta el hartazgo (desde el gobierno y de la oposición) que no se propone luchar por un gobierno de trabajadores y el socialismo. Su planteamiento estratégico parlamentarista evidencia un empantanamiento. Su accionar se reduce a hacer declaraciones y reclamar "pedidos de informes".

La envergadura de la crisis evidencia la necesidad de una dirección independiente del movimiento obrero. La falta de una izquierda revolucionaria militante hace que vuelvan a desarrollarse ilusiones y expectativas en el FA. Este es el problema estratégico a resolver: la construcción de un partido revolucionario y el impulso a un frente de izquierda combativa.

Un plenario nacional de los sectores combativos sería un paso adelante.

Rafael Santos



■ En defensa del
marxismo
revistaedm.com

